

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Rad.: 11001-31-10-030-2020-00296-00.

Clase de Proceso: Medida de Protección

I. ASUNTO

Procede el Despacho a decidir el recurso de apelación interpuesto contra la decisión Administrativa proferida por la Comisaría Once (11) de familia Suba de Bogotá, el 13 de abril de 2020 dentro de la solicitud de Medida de Protección instaurada por EDGAR ARTURO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ en favor de su progenitora ISABEL RODRIGUEZ Vda de SÁNCHEZ contra ELIZABETH SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.

II. ANTECEDENTES

EDGARD ARTURO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, presentó recurso de apelación en audiencia celebrada el 13 de abril de 2020 sobre la decisión adoptada por la Comisaría Once de familia de Suba Bogotá, dentro de la medida de protección en contra de su hermana ELIZABETH SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, dado que refiere no estar de acuerdo bajo los siguientes argumentos: “Primero que todo las injurias y calumnias de la denunciada, así como las injurias y calumnias de la venezolana que vino a atestiguar en contra mía, tampoco puedo argumentar hechos atrás de treinta días , están desvirtuando mi denuncia con base en injurias y calumnias”.

La acción fue admitida por auto calendado del 11 de marzo de 2020, donde se dictó medida de protección provisional a favor de la señora ISABEL RODRÍGUEZ Vda DE SÁNCHEZ consistente en ordenar a la presunta agresora señora ELIZABETH SÁNCHEZ RODRÍGUEZ , que se abstenga de proferir ofensas o amenazas, así, como agresiones físicas, verbales o psicológicas y/o todo acto o conducta que implique maltrato físico, psicológico, verbal en contra de la señora ISABEL RODRÍGUEZ Vda DE SÁNCHEZ de 96 años por cualquier medio o le protagonice escándalos en la residencia o en cualquier lugar público o privado donde se encuentre. Así mismo, se citó a las partes a audiencia de trámite y fallo.

Debidamente notificadas las partes, se efectuó la audiencia pública prevista en el Art. 17 de la ley 294 de 1996 el 13 de abril de 2020, modificada por el Art. 11 de la ley 575 de 2000, diligencia a la que comparecieron la parte demandante y demandada, en dicha diligencia se escucharon los cargos y descargos de cada una de ellas, oportunidad en que el denunciante se ratificó sobre los hechos que originaron la medida de protección y la denunciada NO reconoció haber incurrido en las acciones endilgadas, afirmando que los hechos son falsos y que su hermano desconoce completamente la dinámica del manejo de su progenitora, que ha venido presentado deterioro en su salud, que padece Alzheimer en etapa moderada y problemas

neurrológicos, todos estos avalados por la clínica Colombia y Shaio; que no escucha bien y hay que alzar el tono de la voz para que les escuche.

En sus descargos la accionada refirió “Nunca he agredido a mi mamá porque es una persona de avanzada edad, yo la cuido las 24 horas con la ayuda de una enfermera. Mi hermano no ayuda para nada a los gastos de mi mamá, y di orden de no ingreso de él a mi apartamento, por los cometarios que él le hizo a mi madre de que me iba a golpear por maltratarla a ella”.

En la misma fecha, se valoran las pruebas recaudadas y se profiere sentencia declarando NO PROBADOS los hechos constitutivos de presunta violencia intrafamiliar expuestos dentro de la medida de la referencia por el señor EDGARD ARTURO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ en favor de su progenitora ISABEL RODRÍGUEZ Vda de SÁNCHEZ, y en contra de su hermana ELIZABETH SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. Así mismo, se ordenó el levantamiento de las medidas provisionales decretadas mediante auto de fecha 11 de marzo de 2020

La anterior decisión fue notificada en estrados a las partes y el accionante EDGARD ARTURO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, interpuso recurso de apelación para surtirlo ante los jueces de familia, argumentando no estar de acuerdo con la decisión, bajo el argumento de descalificación del testimonio practicado, indicando que levantan injurias y calumnias en contra de él.

III. CONSIDERACIONES

La violencia siempre trae secuelas para quien las sufre, tales como cicatrices enfermedades a veces no perceptibles inmediatamente, resentimiento, inestabilidad emocional e incluso muerte; quien sufre de violencia intrafamiliar en general, asume comportamientos sociales en ocasiones insatisfactorios que pueden ser multiplicadores de estas mismas conductas. En la Constitución Política de Colombia, título preliminar destaca que la Familia es el núcleo fundamental de la sociedad y como tal el Estado debe protegerla.

La violencia se tiene como factor destructivo de la unidad y la armonía y ha sido definida como conducta realizada por uno de sus miembros contra otro que le ocasione o le pueda ocasionar la muerte; daño en el cuerpo o la salud, sufrimiento físico, emocional, psicológico, sexual, que afecte o pueda afectar su autonomía o su dignidad. De ahí que se consideren como violencia los golpes, amenazas, agresiones verbales, intimidaciones, privación de la libertad, entre otros.

Una de la manifestación más grave de violencia la constituye la ofensa verbal, la evocación de antecedentes vergonzantes de los miembros de la familia, el reproche innecesario, la reincidencia de episodios enojosos que su propio autor quiere olvidar, estos contribuyen a desquiciar la estabilidad familiar, son violencia moral.

La convivencia y las relaciones familiares carecen de soportes como igualdad de derechos y deberes entre sus miembros, respeto reciproco entre todos los integrantes.

Cualquier forma de violencia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la Ley.

El artículo 4o. de la Ley 294 de 1.996, modificado por el artículo 1o. de la Ley 575 de 2.000, consagra: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al juez civil Municipal o promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente...”*.

El artículo 18 Ibídem prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

En el caso de la referencia el accionado, se recurre la decisión por no estar de acuerdo con la misma, bajo el argumento que están desvirtuando su denuncia, con injurias y calumnias, expresadas por la testigo, a quien de manera despectiva nombre por su nacionalidad.

También reposa testimonio rendido por la señora YELITZA VILMARIA MENA MORA enfermera licenciada, quien cuida de la presente víctima en horario de lunes a sábado de 7 am a 5 pm, y en oportunidad manifestó, que no tiene ningún vínculo con la señora ELIZABETH SANCHEZ RODRÍGUEZ, solo trabaja para ella y su hermano AGUSTIN que le contrataron, que en su horario de trabajo no ha observado ningún tipo de maltrato de la señora ELIZABETH hacia su mamá; refiriendo además que la señora ISABEL no escucha bien y por eso deben levantar la voz los habitantes de la casa, pues aunque tiene audífono escucha muy poco. Indica que su paciente no le ha comentado que su hija le maltrate. Respecto al accionante, dice que lo ha visto en pocas oportunidades, cuando ha ido a la casa, sabe que éste llama a su progenitora varias veces, y ella queda un poco indispuesta, por lo que él le dice, incluso presentado episodios de aumento de tensión arterial.

También obra en el expediente, historia médicas y exámenes realizados a la señora ISABEL RODRIGUEZ Vda de SÁNCHEZ, donde de manera evidente y contundente se acredita múltiples padecimientos médicos a sus más de 90 años, mismos que afectan o alteran su percepción de la realidad, su escucha, su forma de ingerir alimentos; condiciones médicas que hacen que su cuidado sea especial y dedicado, motivo por el que tiene una enfermera diariamente, cuyos costos son cancelados por uno de los hermanos, y cuando no está en servicio la enfermera su hija xxx, aquí accionada, es quien vela por los cuidados de su progenitora, sin que existe prueba alguna que amerite la imposición de medida de protección a favor de la adulta mayor y en contra de su hija, quien ha colaborado con los cuidados especiales de su madre ELIZABETH SANCHEZ RODRÍGUEZ.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la decisión adoptada por la Comisaría Once (11) de familia de Suba es acertada, dado que examinadas las pruebas NO justifican la medida de protección solicitada por el señor EDGARD ARTURO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, no existiendo hecho que constituya vulneración o amenaza en la integridad de la adulta mayor.

Frente a los argumentos dados por el accionado al momento de interponer recurso de apelación, habrá que decirse que las calumnias e injurias que según el apelante dice la declarante YELITZA VILMARIA MENA MORA, no fueron probada, pues se observa que en declaración no hay ánimo de favorecer a ninguno de los intervinientes, es un relato espontáneo desde lo que percibe de su labor como cuidadora de la adulta mayor; aunado a que el accionante no prueba en el trámite de medida de protección ninguno de los hechos por él denunciados.

Así las cosas, el recurso no está llamado a prosperar toda vez que la decisión adoptada por la Comisaria Once (11) de familia de Suba, el 13 de abril de 2020, se efectuó con observancia de las formalidades legales y garantizando el debido proceso.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión administrativa proferida por la Comisaría once (11) de familia de Suba., el 13 de abril de 2020, en lo referente a la solicitud de medida de protección solicitada por el señor EDGARD ARTURO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ contra ELIZABETH SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.

SEGUNDO: En firme la presente providencia, se ordena la devolución del expediente a la Oficina de origen. Oficiar. Déjense las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE,

VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
Juez

Firmado Por:

Viviana Marcela Porras Porras
Juez
Familia 030
Juzgado De Circuito
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

9c382999f9124bb85b7bb4d5f48053393f699b034cebc67a12779476b1b91289

Documento generado en 15/09/2021 04:34:53 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>